

Poder y crime en Sur America *por Fernando Mora*

Resumen Ejecutivo

El eje Maduro-Petro representa una peligrosa convergencia de autoritarismo, crimen organizado y corrupción transnacional que amenaza la democracia y la estabilidad en toda América Latina. El régimen de Chávez-Maduro ha transformado a Venezuela en un Estado criminalizado, ofreciendo refugio, recursos y coordinación a redes armadas e ilícitas.

Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, las políticas de “Paz Total” y el acercamiento con Caracas han extendido este modelo más allá de las fronteras. No se trata de una alianza ideológica por la paz, sino de un pacto criminal diseñado para afianzar el poder, expandir las economías ilícitas y erosionar las normas democráticas.

Se requiere una coordinación internacional urgente para exponer, aislar y contrarrestar esta alianza mediante diplomacia, sanciones, cooperación en inteligencia y apoyo a la sociedad civil.

Venezuela: un Estado criminalizado

Venezuela se ha convertido en un centro del crimen organizado patrocinado por el Estado. Grupos armados como el ELN, los disidentes de las FARC, el Cartel de los Soles y El Tren de Aragua operan con impunidad, traficando drogas, oro y personas, mientras participan en la explotación sistemática de comunidades vulnerables.

El régimen de Maduro fusiona el poder político y criminal para mantener el control: aniquila las instituciones, silencia la disidencia y ha forzado al exilio a más de nueve millones de venezolanos. Lo que queda es un Estado sostenido por la coerción, la corrupción y el colapso.

Financiamiento de movimientos políticos

Durante más de dos décadas, Venezuela ha exportado su influencia mediante

el financiamiento político ilícito. El exjefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal ha testificado que fondos del Estado venezolano fueron canalizados hacia movimientos políticos afines en toda la región, incluyendo el ascenso de Gustavo Petro.

Desde la elección de Petro en 2022, han persistido las acusaciones de financiamiento ilícito de campaña y vínculos encubiertos con Caracas. Su defensa pública de Maduro y su participación en inauguraciones cuestionadas subrayan una afinidad con el autoritarismo y plantean graves preocupaciones sobre la interferencia externa en la democracia colombiana.

Lavado de paz (“Peacewashing”)

La iniciativa de “Paz Total” de Petro, presentada como un proceso de reconciliación nacional, ha empoderado y legitimado a actores criminales vinculados con redes venezolanas. Las negociaciones con el ELN, los disidentes de las FARC y El Tren de Aragua han desdibujado la frontera entre la autoridad del Estado y el crimen organizado.

Esto constituye un “lavado de paz”: el uso estratégico de la retórica pacifista para ocultar la connivencia con el poder criminal. La propia trayectoria ideológica de Petro en el M-19 (financiado en su momento por el Cartel de Medellín) y el impulso de su coalición para concentrar el poder reflejan el manual autoritario de Maduro.

Crimen organizado transnacional

La alianza Maduro-Petro ha forjado un sistema criminal transfronterizo que se extiende por todo el continente americano. Los ingresos ilícitos de Venezuela y Colombia alimentan redes de narcotráfico, trata de personas y minería ilegal.

La cocaína que pasa por Venezuela llega hoy a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, África y Europa, interceptando con organizaciones terroristas como Hezbolá y

Hamás, a menudo con apoyo logístico iraní. Los asesinatos políticos en Ecuador y Colombia, así como los ataques contra disidentes venezolanos en el exilio, revelan una infraestructura coordinada de violencia que sostiene este sistema.

Implicaciones y recomendaciones de política pública

El eje Maduro-Petro no es una asociación diplomática: es una red criminal-estatal transnacional. Proteger la democracia regional exige una acción internacional coordinada y sostenida.

1. Medidas diplomáticas y estratégicas

Construir una coalición multilateral para aislar a los regímenes cómplices de la corrupción sistémica.

Utilizar la OEA, la ONU y plataformas regionales para exponer y contrarrestar esta alianza criminal.

2. Sanciones selectivas y rendición de cuentas

Imponer sanciones individuales a funcionarios, financistas y facilitadores del crimen organizado.

Apoyar investigaciones

internacionales sobre financiamiento ilícito de campañas y violaciones de derechos humanos.

3. Cooperación en seguridad e inteligencia

Ampliar las operaciones conjuntas de inteligencia para dismantelar rutas de drogas, oro y trata de personas.

Reforzar los sistemas antilavado de dinero y los mecanismos de seguridad fronteriza.

4. Apoyo a la sociedad civil e instituciones

Fortalecer el periodismo independiente, los organismos de control y los movimientos cívicos en los países afectados.

Reforzar las instituciones democráticas y los programas de protección para activistas y disidentes.

Conclusión

El eje Maduro-Petro no trata de paz, sino de poder, lucro e impunidad. A través de operaciones criminales y una alineación autoritaria, está dismantelando la gobernanza democrática en toda América Latina.

En 2026 se celebrarán dos elecciones clave en Colombia y Perú. En ambos países, el crimen organizado tiene gran influencia. En Colombia, la coalición de Petro, *El Pacto Histórico*, es el aliado más fuerte de Maduro.

Defender la libertad en la región requiere un frente unido: gobiernos, sociedad civil y socios internacionales actuando en conjunto para exponer, interrumpir y dismantelar esta red antes de que se consolide aún más.

Bogotá, Colombia 4 noviembre 2025.